

Escenarios y lecciones de las elecciones centroamericanas (1980-1991)

EDELBERTO TORRES-RIVAS

EL CAMPO DE FUERZAS donde la crisis centroamericana se fue constituyendo desembocó en la guerra civil en tres países. Ese escenario estuvo caracterizado desde la segunda postguerra por el carácter de las luchas por la democracia política y su imposibilidad práctica. Uno de sus actores fue una burguesía terrateniente y comercial que no dejó nunca de utilizar recursos de violencia para ordenar y dirigir a la sociedad, por intermedio de militares y abogados. El ejército aparece como el ejecutor de una voluntad contrainsurgente que define los límites del escenario. Y hay también un abigarrado conjunto de sectores subordinados donde los grupos medios, llenos de voluntarismo, impusieron una dirección y un programa. En sociedades donde la experiencia orgánica y política es escasa, con una clase obrera pequeña e inexperta y un enorme campesinado atrasado, los actores populares se expresan como grandes coaliciones sociales que respaldan soluciones revolucionarias, inmedatistas, violentas.

El escenario político está marcado por los efectos de la guerra civil y la crisis económica. Se trata de la más profunda crisis política que ha experimentado Centroamérica en este siglo. En sus momentos más exacerbados surgieron procesos electorales que se parecieron, para sorpresa de todos, a las formas del sufragio democrático.

1. LA ANORMALIDAD REGULARIZADA

Hay en todo esto, sin duda, una brutal ambigüedad, al volverse compatibles las condiciones de anormalidad que experimenta la sociedad (la violencia) con los esfuerzos por regularizar la vida política (el acto electoral). Hay aquí una primera vinculación conceptual entre crisis política y democracia, las cuales obviamente no pueden marchar de la mano. ¿Qué significa hacer política, y sobre todo hacer política democrática en Centroamérica?

Lo equívoco de celebrar elecciones en una situación de violencia, o de hacer la política y la guerra al mismo tiempo, tal como aconteció en Nicaragua, Guatemala o El Salvador, plantea justamente el problema del poder, tal como se ejerce, se desafía y se defiende. La dimensión que nos interesa destacar acá, analizándola, es la que busca *reconstituir, legitimar, normalizar* el poder político, que es el poder

del Estado. Es un claro proyecto de autonormalización sin desmonte de las piezas maestras de la estructura autoritaria.

Los procesos electorales constituyen mecanismos para lograr tales objetivos, sin renunciar al mismo tiempo a las prácticas que originaron la crisis. Es en este límite donde radica la ambigüedad que en sí mismo contiene el acto electoral. Su convocatoria, la competencia pacífica que origina, la constitución de actores políticos que supone, la función legitimadora en el plano más elemental, etcétera, establecen tensiones profundas con las condiciones sociales en que la crisis política se desenvuelve; es decir: la violencia generalizada, la intolerancia represiva, la guerra. Esto último implica una definición militar del contendiente, del enemigo.

En los tiempos que corren parece restituirse la dinámica propia de la política. En un intento por comprender este período de la historia centroamericana, la política constituye no la continuación de la guerra por otros medios, sino su radical negación. La política niega la violencia, rivalidad mortal, y la sustituye por la competencia partidaria. Hacer política es moverse en lo público, aceptar y participar en el diálogo, reivindicar intereses grupales. Es aceptar la legalidad de la competencia pacífica, que define de manera distinta el papel de los contendientes, la naturaleza de la victoria y el destino de los perdedores. La lógica de la guerra es otra, y lo anormal es que hayan podido compatibilizarse.

Recordemos de nuevo que, en la década de los ochenta, la defensa del orden político se hizo empujando a algunas sociedades a la guerra civil. En efecto, fue la actitud del Estado la causante de esta solución límite. El desafío radical al orden oligárquico condujo, por la manera de defenderlo, a la creación de un desorden total. La violencia militar alimentó el descontento popular que adoptó la estrategia de la lucha revolucionaria por el poder. Y cuando la revolución triunfa aparece la guerra contrarrevolucionaria.

Toda actividad política es finalmente un ejercicio para acercarse al poder del Estado, pero sólo la democracia es capaz de regular los condicionamientos institucionales, legales, para que ese movimiento de aproximación se realice pacíficamente. En esa movilización participa la mayoría ciudadana, sin riesgos. Los actos electorales y la vida partidaria en las sociedades centroamericanas en estado de guerra también son parte de ese ejercicio político. Pero no está ausente la experiencia autoritaria, que en Centroamérica ha significado durante años la desmovilización forzada, ese trecho insalvable que media entre los que mandan porque creen hacerlo con derecho propio, y los que, desintegrados, desorganizados, apaleados, obedecen. Como estas condiciones no han desaparecido con la violencia de la guerra civil, los procesos electorales tienen que ser analizados aún más cuidadosamente.

No puede olvidarse que ha sido tal la extensión de la violencia que ha terminado por filtrarse en lo profundo de la vida cotidiana, condicionando todas las prácticas sociales de los que obedecen, pero también de quienes mandan. La violencia es miedo y éste es una forma elemental de conducta de sobrevivencia, que se expresa en la manera de relacionarse para vivir, y es también silencio, inactividad, parálisis. El retraining es improductivo. Miedo es vivir solo, a la defensiva;

determina la manera de situarse en la sociedad: desde encontrar la manera de moverse sin riesgo hasta terminar con las percepciones de lo inmediato, del futuro, etcétera, condicionadas por él. Hay que preguntarse, en consecuencia, cómo se hace política en el seno de una cultura del miedo, o más elementalmente, cómo se vota cuando se tiene terror. Es cierto que en las experiencias trágicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la magnitud de la violencia homicida ha hecho que esa cultura desvalore el sentido de la muerte, la tortura, el dolor. Convivir durante largos años con asesinatos diarios de amigos y desconocidos, conduce a la *trivialización del horror*. Pero éste es otro problema que sólo puede quedar mencionado.

La vida política, en estas condiciones, surge contaminada por el rencor y la revancha. Ni la existencia de estas limitaciones colectivas desfavorables a la organización/participación popular, ni los efectos perversos de la pobreza, que como sabemos no son sólo carencias materiales decisivas sino impotencia endógena para superarlas, han sido obstáculo para que en los últimos diez años haya habido más de veinte eventos electorales en Centroamérica.

Los puntos de partida son diversos, aun en situaciones tan parecidas como las de las sociedades guatemalteca y salvadoreña. Lo autoritario, como forma patológica del poder, en el lenguaje de Foucault, es común y diverso en cada sociedad. Corresponde a cada cultura política y a sus experiencias servir de plataforma particular, de punto de partida, con todas las dudas implícitas, a esto que en otra oportunidad hemos llamado *transición a la democracia por la vía autoritaria*.

2. LAS LECCIONES ELECTORALES

La sociedad centroamericana salió de la década de los ochenta con movimientos populares armados derrotados de diversas maneras; con una escalofriante extensión de las desigualdades sociales, para las cuales no se ven alternativas; y con gobiernos civiles electos democráticamente. Aquí examinamos esta tercera paradoja: las elecciones sin fraude son el resultado más sorprendente, por cuanto se realizan a contrapeño de la historia, la antigua y la reciente.

Los conflictos sociales que desembocaron en guerras civiles por los efectos de la contrainsurgencia (El Salvador y Nicaragua) o en represión permanente (especialmente en Guatemala y en grado menor en Honduras), ensangrentaron a la región como nunca en su historia republicana. Habría que recordar que la construcción y la estabilidad de una democracia política, en la historia, ha estado siempre asociada con la ausencia de conflictos sociales graves y con la posibilidad de avenirse porque existe una base común de entendimiento. Las eventuales luchas sociales, pacíficas, deben realizarse siempre dentro de márgenes previstos para permitir, rápidamente, consensos interclasistas estables.¹

¹ La experiencia de América Latina en la postguerra demuestra que regímenes democráticos como los de Venezuela, Costa Rica y México son el resultado de acuerdos interclasistas explícitos, con organización sindical limitada y movilización de clases bajo control previo.

La crisis política en tres de los países de Centroamérica fue una ruptura violenta, sin precedentes, en la larga crisis del dominio oligárquico; un enfrentamiento político-militar que ha reproducido, sin advertirlo, las causas mismas que originaron los conflictos, convirtiéndolas en sus efectos más profundos y permanentes. Por ello vale la pena, primero, detenerse un momento a analizar cómo han sido realizadas estas elecciones, para luego examinar sus resultados y entonces preguntarse por las causas inmediatas o profundas de estos fenómenos.

La realización de elecciones, en estas condiciones, ha sido considerada como un acto estrictamente ritual, resultado de una formalidad, una convocatoria con valor simbólico, nada más. No debería ser éste el juicio apropiado, aunque es cierto que la historia centroamericana está repleta de tales ejemplos, que no son ni siquiera lejanos.² No obstante, los procesos que se iniciaron con las elecciones de la Asamblea Constituyente en Honduras (20-IV-80), calificadas desde ese momento como las más honestas en la historia electoral del país, abren un período nuevo en la historia centroamericana. La novedad puede ser limitada o de corto alcance, pero algunas de las características de esos procesos, positivas o no, deben ser señaladas.

En primer lugar, no han sido elecciones fraudulentas en el sentido elemental que este calificativo tiene en la tradición dictatorial de la región: no hay alteración de los resultados en el escrutinio final, ni violencia en el momento de sufragar. La inmediatez pública de los resultados aun sorprende en su eficacia técnica, desconocida hasta ahora. Ello es resultado de que por vez primera el proceso de contar los votos y examinar las actas se realiza en un organismo especializado donde abunda la supervisión extranjera. No ha habido impugnación de los resultados por parte de las partes contendientes.

En segundo lugar, los candidatos que participan (en las presidenciales) son políticos *civiles* que en el inmediato pasado estuvieron, además, en la oposición. Se entiende que en la oposición legal, pública y consentida, aclaración que tiene sentido porque hay una oposición de izquierda ilegal, armada, a la que el sistema político no tiene (¿aún?) condiciones de incorporar, como lo hizo Venezuela con sus guerrilleros bajo la presidencia de Caldera en 1969, o lo está haciendo Colombia bajo Gaviria ahora en 1990. El reciclaje de los grupos guerrilleros en la vida política es todavía un desafío para las estructuras contrainsurgentes de Guatemala y El Salvador, aunque este último país está más cerca de lograrlo.

En tercer lugar, el juego de partidos políticos es ciertamente limitado en su pluralismo ideológico, pero *competitivo* en el sentido de que hay varios contendientes parecidos, aunque pugnaces. La duda acerca de los resultados, como lo ha planteado Przeworski, es un atributo democrático en tanto no está prefijado el

² Las ocho elecciones presidenciales celebradas a partir de 1962 y 1966 en El Salvador; y entre 1964 y 1982 en Guatemala (es decir, más de 17 años), fueron eso, formalidades de una etapa que se conoce como de "democracia-de-fachada"; lo mismo que las 7 elecciones/reelecciones durante el "somozato".

ganador.³ No es éste, por cierto, un rasgo definitorio absoluto, porque en Italia o Suecia, por ejemplo, los partidos en el gobierno han venido ganando las elecciones en los últimos cuarenta años. La incertidumbre se refiere obviamente a que la competencia funciona como la mejor garantía para ciudadanos responsables en contextos libres.

En cuarto lugar, conforme la mejor tradición hispano-latinoamericana, en cuatro de los cinco países se han estrenado entre 1981-1987 constituciones nuevas, *corpus* jurídicos hechos por encargo, es decir, *nuevos* aunque no necesariamente modernos. La parte dogmática jurídica es retardada en relación con sus aspectos orgánicos. En cualquier caso en una exacerbación constitucionalista para uso de gobiernos civiles, a los que también acompaña una nueva reglamentación electoral.⁴

En quinto lugar, en relación con el punto anterior, cabría señalar de manera más precisa el cambio radical que significa la nueva *tecnología electoral* donada, con entusiasmo digno de los nuevos aires internacionales, por los Estados Unidos. En esta novedad obsequiada hay que señalar, por ejemplo, la ayuda para preparar los padrones de la ciudadanía en sociedades como Guatemala y El Salvador, donde la población no ha sido registrada ni existen archivos confiables en las zonas de guerra. Lo relativo a la constitución del padrón electoral es, ciertamente, motivo de dudas. Pero también lo es la papelería para asegurar la secretividad del voto, la tinta indeleble para que el pulgar derecho no traicione el principio, largamente resistido por la oligarquía, de que una persona es igual a un voto; y obviamente, las redes de computadoras, que recogen la información y con ayuda de un *software*, el Programa Platón, la procesan y la vuelven pública e inmediata, confiable. Ya no es cierto, parece, que “el que escruta, elige”.

El programa CAPEL (Centro de Asesoría y Promoción para Elecciones en América Latina), adscrito al Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, ha dado entrenamiento mínimo pero indispensable a funcionarios locales, representantes partidarios de mesa, etcétera, para la administración elemental del acto del sufragio. Aún queda mucho por hacer, pero una nueva legislación electoral y funcionarios capacitados técnicamente deben ser vistos como avances significativos.

Finalmente, en los cinco países las elecciones han estado bien acompañadas por importantes contingentes de periodistas extranjeros. Pero en cuatro de ellos ha habido otro acompañamiento menos usual: una legión de *observadores* extranjeros del más diverso pelaje. Las elecciones centroamericanas han sido *elecciones sobrevigiladas*, especialmente por ciudadanos estadounidenses de buena y de mala

³ Ver el conocido ensayo de Adam Przeworski, “Democracy as a contingent outcome of conflict”, mimeo, 1984, p. 1, después publicado entre otras revistas en *Cuadernos Cebrap* con el título de “Ama a incerteza y serás democrático”.

⁴ La tradición circular de “golpes” militares, suspensión de la Constitución, Asamblea constituyente, etcétera, esta vez sirvió para que esta última aportara leyes de amnistía total que beneficiaron directamente a los responsables de las violaciones públicas de los derechos humanos.

fe. También ha habido presencia de europeos, de las Internacionales, de Fundaciones, de observadores de ciertos gobiernos como el español, alemán o sueco, etcétera. La confiabilidad democrática local fue puesta a prueba no sólo por la profunda internacionalización de la noticia local, resultado de la modernización vertiginosa de la transmisiones por satélite. Descansó también en los ojos y oídos extranjeros, garantes parciales u honestos, unos con serias dudas acerca de la habilidad para disfrazar el fraude; otros (la mayoría, supongo) con simpatía por Centroamérica y por el azaroso destino de su mayoría de edad representativa.

En el inicio y al final de los ochenta, esta ola electoral, cuya calificación se analiza más adelante, sorprendió a los gobiernos convocantes, a los partidos triunfadores, a los mecenas ideológicos y financieros, a los que perdieron, a los observadores y, por supuesto, a las masas ciudadanas cuya credibilidad es de corto plazo. Ganaron y perdieron todos los participantes como nunca antes y el derecho a la vida fue respetado para los derrotados. Por ejemplo, fueron mutuas las sorpresas de los liberales hondureños, que obtuvieron la mayoría de cargos en la Asamblea Constituyente de 1980, y de los sandinistas, que fueron los perdedores en las elecciones de 1990.

En el interior de esa década se eligieron dos presidentes liberales (1981 y 1985) y uno conservador (1989) en Honduras. Ganó y luego perdió la presidencia la Democracia Cristiana en Guatemala (1985 y 1990) y El Salvador (1983 y 1988), así como las correspondientes mayorías en las Asambleas Constituyentes y en los Cuerpos Legislativos. Perdió en 1986 y luego ganó en 1990 la terca oposición socialcristiana en Costa Rica, que dejó por vez primera en cuarenta años en minoría al Partido Liberación Nacional (socialdemócrata) en la Asamblea Legislativa y en los cuerpos edilicios. Y como se ha dicho, ganó en 1984 y perdió en 1991 el sandinismo en Nicaragua. Hubo además elecciones para diputados, municipales y otras de menor significación.

Es importante mencionar también la naturaleza de las convocatorias electorales que, *desde el inicio*, sorprendieron de múltiples maneras: *primero*, porque no fueron el resultado de presiones desde la sociedad civil, vale decir, la victoria inicial de las fuerzas políticas organizadas en la base, capaces en esta conyuntura de torcer el puño autoritario de los militares. La iniciativa se produjo *desde arriba y bajo estrecho control*. ¿El Estado autoritario democratiza la sociedad? En tres de los cinco países fueron gobiernos *ilegítimos* quienes convocaron a la ciudadanía, primero para elegir cuerpos constituyentes y luego para resolver el asunto de la sucesión. Como eran gobiernos de las Fuerzas Armadas, la decisión implicó también la operación estratégica de volver a los cuarteles sin abandonar ni las calles ni el Palacio Presidencial. En las condiciones de la menguada legitimidad existente ha sido una señal inequívoca de querer mejorarla convocar a un cuerpo constituyente que preparase una nueva Constitución que, como elemental paradoja, los propios militares, habían atropellado, suspendido o simplemente, ignorado.

En *segundo* lugar, las convocatorias llaman la atención por la movilización decisiva de fuerzas o intereses extranjeros, cuya actuación local no puede ser asumida

como mera coincidencia. Para mejor comprensión de esto, tal vez haya que recordar que la crisis centroamericana tuvo una inédita dimensión internacional. Por esto se entiende *el papel activo de los actores externos* —gobiernos, organizaciones, dignatarios extranjeros— en el desarrollo y solución de los conflictos nacionales. La acción del Grupo de Contadora sólo es un ejemplo de una feliz iniciativa latinoamericana; las recomendaciones de la Internacional Socialista son otra muestra de este juego que involucró fuerzas externas. Sin embargo, en los escenarios de la iniciativa electoral, la política exterior estadounidense fue influyente de manera pública y directa, resultado de planes de contingencia trazados y aprobados en el marco de una estrategia de seguridad y promoción de nuevos gobiernos civiles. Por parte de los Estados Unidos, las elecciones fueron vistas como la constitución de nuevos aliados, de remplazo.

En *tercer* lugar, a la convocatoria lanzada en el seno de una doble crisis —la general instalada en la sociedad y la de legitimidad en el seno de la alianza gubernamental— respondieron con entusiasmos de diversa temperatura todas las fuerzas políticas capaces de competir legalmente. Y como veremos más adelante, la respuesta popular expresada en los índices de abstención y participación (tal como se definen en este texto) también fue inmediata y extensa en todos los países excepto Guatemala. ¿Una expresión de confianza o de temor? Es difícil saberlo en relación con una ciudadanía poco experimentada en el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos y, además, atemorizada por la violencia y disminuida por la pobreza.

3. LA INCIERTA RECOMPOSICIÓN DEL ORDEN

Toda la descripción anterior intenta solamente informar acerca de las condiciones de crisis que antecedieron y acompañaron el despliegue electoral, deteniéndose en los fenómenos de la violencia y en el acto administrativo de la convocatoria. Cabe en consecuencia preguntarse: ¿por qué hubo elecciones en un contexto revolucionario como el nicaragüense? ¿Por qué se ponen en marcha mecanismos electorales en Guatemala, El Salvador y Nicaragua? ¿Es ésta la manera de construir los puentes para la paz? ¿O es solamente un recurso complementario de la victoria militar?

Las explicaciones intentadas son diversas e incompletas. La explicación más a la mano no puede dejar de reconocer la influencia estadounidense, ambigua por momentos, pero ubicua, decisiva y múltiple. Sin esa cooperación financiera, técnica y política, condicionada siempre, sea como consejo diplomático o abiertamente como expresión de predominio, no habría estos resultados. Estados Unidos “inspiró” en todas partes algo de la conducta militar y algo del comportamiento de los partidos políticos, en una nueva estrategia para la región: gobiernos civiles salidos de las urnas; retorno a la constitucionalidad y al estado de derecho, encabezados por una nueva cohorte política de fuerzas centristas o abiertamente conservadoras, ejércitos formalmente disciplinados al poder civil, combatiendo con ayuda

estadunidense a la insurgencia guerrillera. En estos resultados, como adelante se indica, fueron decisivos los factores locales.

Esa estrategia tenía, además, la finalidad de rodear a Nicaragua de gobiernos “democráticos”, a fin de subrayar que el sandinismo carecía de tales atributos. La novedad del proceso coincide, y no por casualidad, con la ola electoral que acompañó la erosión o el abatimiento de los gobiernos autoritarios en el Cono Sur. Por este conjunto de circunstancias internas e internacionales, la estrategia electoral en Centroamérica recibió apoyo técnico y financiero, simpatía colectiva, fuerza moral. La excitación democrática alcanzó a todos.

Hay sectores de la izquierda armada que atribuyen a la presión de la guerrilla la respuesta electoral, como búsqueda de la legitimidad perdida por los gobiernos militares contrainsurgentes, desacreditados por el terror contra la población civil y el manejo de la economía. Sin guerra previa ¿no habría elecciones? Un análisis más conservador y realista ha subrayado —como argumento— la conveniencia de restituir la división funcional del poder y el orden institucional, gracias a la cual los militares pueden volver ordenadamente a los cuarteles, dejando en manos de los partidos la difícil administración de la crisis. ¿A quién atribuir, en esta mayúscula decisión, las virtudes democráticas?

Otra razón toma en cuenta que, a comienzos de la década de los ochenta, que es la que nos interesa, las economías centroamericanas habían entrado en una profunda fase recesiva, exhibiendo de manera impúdica todas las viejas debilidades estructurales, flaquezas previas que habrían de desvelar los problemas de la deuda externa, la inflación desconocida en cuatro de los cinco países, las debilidades del comercio exterior, la fuga de capitales, la falencia del Estado, etcétera. Las tensiones sociales llevaron a estas sociedades a situaciones de gobernabilidad difícil, aumentando el desgaste político de la cohorte militar en ejercicios de poder, enfrentando enemigos ajenos y distantes de las líneas de fuego. Recuérdese que las primeras medidas del ajuste estructural fueron intentadas por gobiernos militares, que vieron multiplicarse los frentes de combate, que incluyen ahora las relaciones con la Iglesia y con las poderosas cámaras patronales. Aparece aquí una explicación, que apuntaría a la incapacidad y al oportunismo: dejar en manos de políticos civiles la administración del desorden económico y social.

Las coincidencias nada despreciables entre la convocatoria hecha por los militares y las presiones estadunidenses en tres países ha llevado el razonamiento a un punto difícil: las elecciones son parte de la panoplia contrainsurgente, aconsejada por los estadunidenses y aplicada brutalmente por los militares. La izquierda insurreccional no tiene dudas y no acepta el procedimiento porque lo asume como parte de una estratagema que los enfrenta: ¿La derrota del enemigo, de la subversión, pasa por, o necesita del recurso electoral? ¿La democracia política es necesaria para finalizar lo que las armas comenzaron? La política como la continuación (paralela) de la guerra.

Habría una última explicación, conectada con las dos anteriores, pero más sustantiva porque está referida a la *crisis política que se fue gestando en el interior de la cúpula del poder* —entre 1979 y 1982— en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Sin tomar en cuenta estos factores locales, ninguna explicación puede ser satisfactoria. Ocurrió, en efecto, una verdadera *disgregación del poder* como resultado de conflictos internos: un abierto conflicto intraburgués que incluyó a la alta dirigencia militar, a la élite económica y política, a la jerarquía eclesiástica y a los grupos de servidumbre que los rodean. Como ocurre siempre en esta particular tradición autocrática, cuando la crisis se instala también en las estructuras jerárquicas de la institución armada, se resuelve tarde o temprano, pero siempre en el interior del propio ejército, de manera incruenta y a través de un golpe militar. Éste ha sido el mecanismo tradicional para resolver disputas militares que nunca llevan la sangre al río.

La explicación que se intenta va en el sentido de subrayar que la inestabilidad que afecta a las fuerzas armadas reproduce por momentos los conflictos de la sociedad, conflictos que sólo podrían resolverse políticamente en una cultura democrática. Siendo el ejército el pivote de un arreglo que se debilita por múltiples motivos, la convocatoria electoral aparece como un intento de resolver el problema de la sucesión al rehacer las relaciones con los partidos (y con la sociedad civil).

Habría que agregar, sin embargo, que las elecciones en Nicaragua también expresan, como respuesta, una situación de crisis, pero de naturaleza hartamente diversa a la de los tres países mencionados. No era una crisis en el seno del sandinismo, sino ampliada al conjunto de la sociedad nicaragüense. Las relaciones del Estado con la sociedad se fueron deteriorando por varias razones que tienen como pivote la guerra de baja intensidad instigada desde el exterior.

Es por la suma de estos factores que los procesos electorales, la competencia partidaria y las consecuencias que indirectamente va provocando, ayudan a modificar las relaciones políticas entre las fuerzas sociales, cuyos intereses redefinió abruptamente la crisis; modificaciones que ocurren tanto en el terreno acotado del Estado como en sus articulaciones con la sociedad. Es necesario, para que esto ocurra, que los espacios democráticos se amplíen constantemente.⁵ Sin duda, la competencia política reiterada puede ser un recurso para estructurar políticamente las relaciones en el interior de los grupos dominantes; para restablecer la articulación funcional con el ejército y, obviamente, dotar de credibilidad a la dominación política y al sistema mismo. Todos estos efectos no transforman una sociedad política en una democracia, pero pueden ayudar a ordenar la vida social y permiten exhibir nuevas credenciales, democráticas, civilizadas, credibilidad que también depende de muchas otras circunstancias.⁶

⁵ Esta línea de razonamiento aparece también en P. W. Drake y E. Silva, *Elections and Democratization in Latin America, 1980-85*, University of California, San Diego, 1986, especialmente la introducción y los trabajos de Terry Karl, John Booth y Wayne Cornelius; y G. Di Palma y L. Whitehead, *The Central American Impasse*, Croom Helm Ed., Londres, 1986, donde hay excelentes análisis de Luis Maira, John Weeks y Terry Karl.

⁶ Mitchel Seligson, "Development, Democratization and Decay: Central America at the Crossroads", y M. Rosenberg, "Political Obstacles to Democracy in Central America", ambos en J. M. Ma-

4. LAS ELECCIONES, PARTICIPACIÓN RECORTADA

Es necesario volver y describir rápidamente cómo se resolvió la crisis en cada una de las cuatro sociedades bajo análisis. Queda para el final una referencia para la democracia costarricense.

a) En Honduras, diecisiete años de gobiernos militares —desde el golpe del general López Arellano (1963) contra el doctor Villeda Morales, hasta 1980— consolidaron finalmente un abierto predominio político del ejército nacional. La voluntad reformista de algunos jefes militares, importante para una sociedad urgida de cambios, se debilitó hasta terminar en el seno de agudas formas de corrupción y disputas internas casi incontrolables al final de este periodo: recordemos el golpe al general López Arellano (22-IV-75) y otro igual a su sucesor, el coronel Melgar Castro (7-VIII-78), que llevó a la primera magistratura a un triunvirato, y finalmente al coronel Paz García. Fue éste quien se vio obligado a convocar (y luego a respetar) elecciones constituyentes en febrero de 1980. (Ver cuadros 1 y 2.)

Fue Honduras el primer país que, en la década de los ochenta, inició su proceso de democratización por la vía autoritaria. Aquí, *el gobierno de facto* se comprometió a aceptar el resultado electoral, dando inicio así a una década durante la cual se han realizado elecciones libres en cuatro ocasiones: unas parlamentarias (Asamblea Constituyente) en 1980, y tres presidenciales, en 1981, 1985 y 1989. (Ver cuadros correspondientes.) Varias circunstancias sorprendentes acompañan esta democratización a disgusto. El general Paz García, jefe del gobierno, aceptó previamente los resultados electorales (abril de 1980) ante el señor William Bowder, secretario asistente para Asuntos Interamericanos, a cambio de una masiva ayuda técnica y financiera que le fue ofrecida para modernizar el ejército, particularmente la aviación, y para construir dos bases militares. El ejército hondureño se comprometió en una nueva estrategia militar y política en Centroamérica, planteada a raíz de la llegada sandinista al poder.⁷

Honduras tiene el sistema político partidario más antiguo de Centroamérica. Se trata de un bipartidismo de fuerte arraigo rural que se mantiene hasta hoy por la persistencia y renovación de prácticas clientelistas. Éstas, como lo establece con sencillez teórica Leal Buitrago, son formas de apropiación privada de recursos públicos con fines políticos.⁸ La libertad electoral pone a prueba la solidez del bipartidismo hondureño que entra en crisis solamente para fortalecerlo, y sin que los graves problemas sociales y económicos hayan sido resueltos. El carácter duramente atrasado de su manera de hacer política vivió en este país una experiencia extraordinaria con la Ley Electoral y de organizaciones políticas (27-XII-77),

lloy y M. A. Seligson (ed.), *Authoritarians and Democrats, Regimen Transition in Latin America*, University of Pittsburgh Press, 1987; y E. Torres Rivas, *La democracia posible*, FLACSO-EDUCA, San José, 1985.

⁷ *Central American Up date*, Washington, febrero de 1984, y K. Donahue, Ph. Berryman y M. Benjamin, "La ayuda económica de EU en Centroamérica: el caso de Honduras", en *Boletín Especial*, CEDOH, Tegucigalpa, agosto de 1987, p. 13.

⁸ Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila, *Clientelismo, el sistema político y su expresión regional*, IEPYRI y Tercer Mundo Ed., Bogotá, 1991, 2a. ed.

que puso a prueba la democratización partidaria al prescribir las elecciones internas. Este golpe al viejo caudillaje político desató la crisis en ambos partidos, pero especialmente en el Liberal, que sólo después de 1985 camina dificultosamente por la doble ruta de la modernización y la democracia interna.

El Partido Liberal ha ganado tres de las cuatro elecciones de la década frente a su rival histórico, el Partido Nacional.⁹ Ni la violencia partidaria ni la violación de los derechos humanos están ausentes en Honduras, pero nunca han sido comparables al horror sistemático de Guatemala y El Salvador. Las elecciones de noviembre de 1989 fueron ganadas de manera abrumadora por el candidato opositor del Partido Nacional. Debe subrayarse que la tasa de inscripción electoral es alta en este país, similar a la de Costa Rica, y la abstención es baja, aunque oscilante. Lo que denominamos "tasa de participación" (la relación porcentual entre electores y la población en edad de votar o electores potenciales) es relativamente alta: más de las dos terceras partes de la ciudadanía ejerce el voto, lo que revela un sistema político más estable que el de los países vecinos.¹⁰

b) Quince años de gobiernos militares —llamados democracias-de-fachada— en Guatemala y El Salvador también condujeron a una crisis interna en las Fuerzas Armadas, que terminó en sendos golpes de Estado, uno contra el general Romero (15-X-79) en El Salvador y otro contra el general Lucas en Guatemala (23-III-82). Estos golpes no estuvieron animados por finalidades democráticas restauradoras. Eran claramente "arreglos de cuentas" entre fracciones rijosas del mismo ejército que abrieron la posibilidad de convocatorias electorales. Las democracias de fachada constituyen un ejemplo de los límites de la democracia formal o del nivel aparential de ésta, en tanto se combinó la formalidad externa de las elecciones (sólo para elegir generales) con un instrumento legislativo, un parlamento monosilábico. En las *democracias de fachada el voto sólo sirve para elegir diputados y alcaldes de los partidos afectos al ejército*. El modelo incluyó la desactivación popular, el uso de la fuerza descarnada contra todas las manifestaciones de la oposición.

En las fechas indicadas, en ambos países se abrió un período de inestabilidad a través de cambios sucesivos en la dirección del poder ejecutivo, cuya irremediable ilegalidad los condujo finalmente a la convocatoria electoral de ciudadanías desactivadas. A este proceso le hemos llamado en otro ensayo una "transición autoritaria a la democracia". (Ver cuadros 3 y 4.)

⁹ El Partido Liberal fue fundado en febrero de 1891 por la generación de políticos más importante que ha tenido este país: Ramón Rosa, Luis Bogran y Policarpo Bonilla. De su seno han salido todos los partidos o grupos políticos, incluidos los "nacionales", desprendimiento conservador que luego fue apoyado corruptamente por la United Fruit Co. Cf. Arturo Fernández, *Partidos políticos y elecciones en Honduras 1980*, Ed. Guaymurás, Tegucigalpa, 1983; Aníbal Delgado Fiallos, *Honduras, elecciones 85*, Ed. Guaymurás, Tegucigalpa, 1986; James A. Morris, *Honduras, Caudillo Politics and Military Rulers*, Westview Press, Boulder, 1984. Para los aspectos políticos, ver V. Meza (ed.), *Honduras, pieza clave de la política de EU en Centroamérica*, Tegucigalpa, 1986; Leticia Salomón (ed.), *Honduras, panorama y perspectivas*, CEDOH-UNAH, 1989; y M. Rosenberg y Ph. Shepherd, *Honduras confronts its future, contending perspectives on critical issues*, Lynne Rienner Pub., Boulder, 1989.

¹⁰ Excelentes análisis en V. Meza, "Las elecciones en Honduras, una interpetación" y J. R. del Cid, "Logros y perspectivas del proceso de democratización en Honduras", ambos en *Polémica*, núms. 10 y 11, respectivamente, San José, 1990.

En El Salvador, la celebración de elecciones libres fue la condición estadounidense *sine qua non* para aprobar la ayuda militar que permitiría reconstruir el ejército y, con ello, aplicar una estrategia militar para contener a las fuerzas insurreccionales del FMLN. La rapidez con que se produjeron tales fenómenos —voto legislativo en Washington a favor de la ayuda en 1981, modernización masiva del ejército, ofensivas contra la insurrección popular— hace pensar que las elecciones fueron inicialmente un recurso contrainsurgente. Aunque esto sea cierto, como explicación no es suficiente; hay otros argumentos, sin duda. Se perseguía, además, el propósito de implantar o recrear nuevas fuerzas políticas, establecer nuevos aliados reconstituidos como un sólido centro en el espectro político. De las elecciones así planeadas surgió finalmente la Democracia Cristiana como la primera fuerza política del país (1982) y, además, el *primer presidente civil electo democráticamente en más de medio siglo*. (Duarte, 1984). El triunfo democristiano no sorprendió a nadie, pues era bien sabida su condición de mayor partido nacional en el país. El ingeniero Duarte ya había ganado las elecciones de 1972.

En resumen, después de la elección de la Asamblea Constituyente hubo dos elecciones presidenciales, tres para diputados y dos para alcaldes. En un período de siete años hubo ocho elecciones, testimonio vivo de la excitación electoral que acompaña la más sangrienta guerra civil habida en América Latina después de la Revolución mexicana.

Del seno de esta sociedad que mezcla la participación armada con la electoral surgió un partido de la extrema derecha con incuestionable apoyo popular, la Alianza Republicana Nacionalista —ARENA—, que conquistó desde 1982 con altibajos una amplia mayoría que permitió elegir a Alfredo Cristiani como presidente en 1989.¹¹ El éxito electoral de ARENA fue, sobre todo, la derrota del centro político (la democracia cristiana) y especialmente de su incapacidad para advertir, según lo exigía la coyuntura, reformas con pacificación, ambas urgentes para frenar la destrucción de la sociedad misma. Ni lo uno ni lo otro. Fracaso de una alternativa histórica nacional y de una opción estadounidense.

¿Tiene que ser entendido esto como una derechización de la ciudadanía de un país donde se libra una guerra popular, única en la historia latinoamericana cualesquiera que puedan ser las simpatías por el FMLN? Todo esto revela el fondo íntimo que separa a las luchas sociales y a su lógica de la competencia electoral. Recordemos que las identidades que alimentan esos actores son distintas, y las solidaridades que expresan son opuestas. El movimiento popular en El Salvador, como en Nicaragua, abarca una franja más ancha que el movimiento armado. Es un movimiento de masas que en el acto de votar adopta o facilita otros comportamientos. En las luchas sociales predominan los intereses clasistas y se mueven voluntades más orgánicas y permanentes. El acto electoral es cada vez más el resultado de

¹¹ R. Córdoba M., "El Salvador: análisis de las elecciones presidenciales y perspectivas políticas", en *Polémica*, núm. 11, San José, 1990. Cristina Eguizabal, "El Salvador: elecciones sin democracia", en *Polémica*, núm. 14-15, la. época, San José, 1984; la revista *ECA* y las publicaciones del CINAS contienen una crónica detallada y útil de estos diez años tan rápidamente considerados aquí.

una operación manipuladora. No un instrumento de convicción ideológica, sino un insoslayable acto de *marketing*. Pero ARENA ha tenido la habilidad de presentarse como el partido-del-orden y ése es un valor decisivo en sociedades castigadas por la guerra.

Otro ejemplo próximo, que debió servir de irremediable antecedente es lo ocurrido con el voto de los nicaragüenses a favor de la UNO, que tiene que ser visto en El Salvador desde la dimensión trágica de una sociedad arrastrada a la guerra civil. En situaciones de crisis social prolongada, el voto, la elección, está determinado por consideraciones personales en las que priva la desesperación inmediata. Frente al caos social se vota por la seguridad y el orden. Los resultados, en el caso de Nicaragua, estaban prefigurados en las condiciones de una profunda crisis social, pero ocultos por la vigorosa retórica revolucionaria. La moraleja de este par de comportamientos electorales es que el discurso de la derecha tiene condiciones de ser más coherente por ser más elemental y porque tiene el atractivo de la condena al desorden (la revolución) que la izquierda promueve.

Como lo indican los cuadros correspondientes a El Salvador, la conducta electoral es contradictoria en un país en guerra. La tendencia a anular el voto (voto en blanco) sólo es importante en las elecciones para diputados de 1988. La abstención tiende a subir y en 1991 alcanza a casi la mitad de la ciudadanía activa, pero la participación (ya definida líneas atrás) tiende a disminuir desde casi dos terceras partes de la población con derecho a voto hasta un poco menos de la mitad. La tasa de inscripción es oscilante, pero más alta que en Guatemala, país con el que debe hacerse la comparación, y estaría revelando para El Salvador la eficacia de los métodos para construir los padrones electorales, pero la debilidad de las convocatorias a las elecciones (véase tasa de abstención y participación).

En Guatemala, la decisión de procurar el retorno a la vida constitucional y restituir a la vida política sus virtudes y riesgos, también fue hecha por el ejército. El gobierno militar *de facto* del general Mejía Victores, que sustituyó a otro de similar pelaje (general Ríos Montt), convocó a una Asamblea Constituyente y promulgó leyes que organizaron el Tribunal Supremo Electoral (con carácter independiente), el Registro de Ciudadanos (para mejorar las técnicas de inscripción e identidad) y la Ley de Organizaciones Políticas (que estableció requisitos mínimos para la creación de partidos).¹² Ha habido diversos procesos electorales: parlamentarias (1984), presidenciales (1985-86, 1990-91) y municipales (1988). Los cuadros correspondientes muestran que Guatemala es el único país en que la abstención aumenta en cada acto electoral; la inscripción, aunque estable, sólo alcanza a dos tercios de la población adulta. Lo que hemos llamado "participación electoral" tiende a disminuir de más de la mitad de la ciudadanía potencial a menos de un tercio. (Ver cuadros 5 y 6.)

Al igual que en El Salvador, en los primeros tres eventos, la democracia cristiana surgió como la primera fuerza política del país, ratificando así lo que ya

¹² Víctor Gálvez B., *Elecciones y transición democrática en Guatemala*, Cuadernos de Ciencias Sociales, FLACSO, Costa Rica, 1991; Héctor Rosada, "Guatemala 1990: elecciones generales durante la transición política", en *Polémica*, núm. 12, San José, 1990.

era una sospecha que el fraude ocultó. No se olvide que también en este país la DC ganó elecciones presidenciales de 1974. De nuevo, la victoria electoral democristiana y las difíciles condiciones de una sociedad azotada por la violencia sólo prueban las graves dificultades que el poder civil tiene que resolver para construir un sistema político democrático; de hecho, para reconstruir la vida política como alternativa a la violencia. Guatemala experimenta una suerte de *efecto antidemocratizador*, pues con la estrategia de entregar el poder a los partidos civiles, las fuerzas autoritarias permanecen y retienen su estructura y su capacidad homicida. El control militar de una parte de la sociedad se traduce en una dualidad asimétrica de poderes, en el que el civil, por su debilidad, tiene mucho de emblemático. La crisis política persiste y los actos electorales la exhiben de otra manera: fragmentación partidaria, inestabilidad interna de todos los grupos políticos, alianzas y componendas más frágiles que la voluntad democratizadora, todo ello en un contexto de inseguridad, terror y guerra.

La derrota de la democracia cristiana en las elecciones de 1991 debería interpretarse no como un simple fiasco electoral, sino como la desaparición de una opción programática, de una oportunidad de salida para la crisis, y por lo tanto, como el fracaso de las expectativas e ilusiones de una ciudadanía confiada en una nueva generación de cuadros políticos. Propiamente, una autoderrota de estos líderes que no tuvieron vocación de estadistas y que quedaron, sin duda, capturados por las limitaciones locales de la "cultura cívica" que produjo esta coyuntura. Lo cierto es que la dirigencia demócrata cristiana, en ambos países, no percibió el papel renovador, de rescate nacional, al que estaba llamada. Ambos partidos fueron derrotados por fuerzas conservadoras que representan, de manera inédita hasta entonces, los perfilados intereses del gran capital nacional.

No es imprudente considerar, tanto en Guatemala como en El Salvador, las dificultades para reconstituir un centro político dinámico, reformador y autónomo. Para aplicar una política de izquierda o de derecha *desde el centro*, para sumar fuerzas y posibilidades. Los mecanismos electorales pueden constituir un recurso que contribuye a estructurar políticamente las fracturas en el interior de la clase dominante, entre las fracciones que la crisis desveló, así como para ratificar la articulación *dirigente* con el ejército. A estas alturas, ninguna duda cabe acerca de la magnitud política y nacional de las fuerzas armadas como factor de poder. Al mismo tiempo, tenemos dudas acerca de este poder que en más de una década, utilizando masivamente recursos de terror, no ha podido resolver el desafío de la insurgencia armada.

c) En Costa Rica la democracia política, que tiene una fuerte base social, mantiene su estabilidad a pesar de la turbulencia económica y de los graves desafíos que provocó la crisis en los primeros años de la década. La aplicación de políticas de ajuste han sido calificadas de heterodoxas, en parte porque el estilo para desarrollarlas mantiene una preocupación por el destino del salario mínimo, de los servicios públicos y del bienestar de la población. No es sólo una preocupación de origen electoral, sino una tradición que vincula fuertemente el papel del Estado con el mantenimiento de la democracia. (Ver cuadros 7 y 8.)

A partir de 1949, como es sabido, se modernizó el sistema político y desde entonces hay elecciones que van conformando un bipartidismo con abierto predominio del Partido Liberación Nacional. (Véase, por ejemplo, como gana y pierde las elecciones el PLN en esta década, en los cuadros correspondientes.) La crisis de la década va alterando esta tradición de casi medio siglo al debilitar el vigor socialdemócrata de este partido y hacerlo perder en las elecciones de 1990 la mayoría parlamentaria, la municipal u otros contextos donde aparece el voto. El bipartidismo en el marco de una cultura política democrática refuerza la estabilidad, pero reduce grandemente las opciones programáticas. Ninguna política puede apartarse de una visión ideológica, que sirve para definir un universo de valores y concepciones diferentes. Es éste y sólo éste el sentido del pluralismo y la competencia. En Guatemala, el pluralismo es limitado e independiente del número de partidos. En Costa Rica, la competencia se ha reducido a la elección de opciones cada vez más parecidas. Son elecciones competitivas pero sin sorpresas.

La información estadística confirma, de otra manera, la estabilidad expresada en la permanencia de la alta tasa de población inscrita para votar, en el bajísimo número de votos nulos o en blanco y en una abstención promedio del 18% y una tasa de participación alta pero parecida a la de Honduras y Nicaragua. En el comienzo de la década de los noventa, el "péndulo electoral", el descontento por el neoliberalismo del PLN y la derechización del universo político internacional favorecieron el triunfo electoral de una amplia coalición socialcristiana (el PUSC), que ató con lazos menos orgánicos que de oportunidad una alternativa al Partido Liberación Nacional. La victoria de Rafael Ángel Calderón es doblemente significativa. Por lo dicho líneas atrás y porque su nombre e imagen es la del *calderonismo populista tradicional*, que forma parte de la historia reciente de Costa Rica. Tampoco esta victoria puede ser considerada una derechización del electorado, pues en épocas de ajuste económico, el voto de castigo es la conducta reactiva elemental, casi despolitizada, de ciudadanos que dejaron de experimentar las bondades del crecimiento económico.

d) La lucha popular contra la dictadura en Nicaragua tuvo siempre un contenido democrático, y el programa y la práctica sandinista no fueron ajenos a esa demanda fundamental. Son numerosos los documentos en que el FSLN definió la democracia como algo que no se mide en el terreno político ni se reduce a elecciones, sino que se recrea en la sociedad. Democracia significa participación organizada en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. No obstante, menos que las necesidades de la revolución, la influencia internacional empujó las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre de 1984, que fueron ganadas por el FSLN frente a una oposición dividida. Una de las fracciones aceptó el desafío legal. Otra optó por la guerra mercenaria, pero todas reprodujeron fatalmente los viejos odios partidarios del pasado. Entre estas elecciones y las de 1990 se produjeron cambios importantes en el interior del país. El proyecto de democracia participativa sandinista se fue convirtiendo en uno de democracia representativa. Y nunca estuvo ausente, además, el verticalismo intransigente de toda organización

revolucionaria, que para defenderse requiere de mecanismos de autoridad desde la cúpula. (Ver cuadros 9 y 10.)

La voluntad democrática del sandinismo no fue poderosa por los antecedentes inmediatos de su origen social, político e ideológico. El sandinismo se originó en el seno del somocismo, que operó como sistema de poder personal, arbitrario y corrupto durante tres generaciones. La Guardia Nacional es el antecedente del Ejército Popular Sandinista. Éste derrotó a la otra, pero frecuentemente utilizando sus mismos métodos. El amo y el esclavo, finalmente, se niegan pero se parecen. La cultura democrática no puede construirse en un corto período histórico en el que operan factores tan negativos como la ofensiva contrarrevolucionaria. La política estadounidense no dio tregua en ningún momento y defenderse de ella no cabe con recursos de libertad y tolerancia. El sandinismo constituye un notable avance por la participación popular y el ejercicio de las libertades políticas, pero todo ello en el seno de una cultura autoritaria. La entrega del poder a la señora Chamorro constituye una prueba final de la contribución sandinista a la construcción de una sociedad democrática. Pero falta mucho por hacer.

Sin duda, no es éste el lugar para analizar la experiencia democrática de Nicaragua. Convicciones, estrategias y retóricas se juntan para producir una extraña unanimidad favorable, en todo caso, a la celebración de elecciones. Pero esta vez como nunca los límites a la política los impuso la economía. La crisis económica, como se dijo líneas arriba, anticipó los resultados que numerosas encuestas no pudieron predecir. La derrota del sandinismo en las elecciones presidenciales de 1990 no fue en todo caso el fin del proceso revolucionario iniciado once años atrás. Solamente fue el tiro de gracia para el mismo, pues las políticas de normalización económica, de fuerte contenido antipopular desde 1988, habían convertido al programa de transformación socialista del FSLN, en una defensa sin futuro, elemental, del sistema político, irremediablemente en crisis.

La victoria de la Unión Nacional Opositora arrebató al Frente Sandinista su hegemonía en los sitios donde ésta se había venido estableciendo en profundidad: en los barrios urbanos, entre los campesinos medios y pobres, en la ciudad de Managua, cuna de la revolución. Aparecen aquí condiciones y al mismo tiempo toda una suma de debilidades para reencauzar la sociedad nicaragüense. El Pacto de la Transición es un arreglo entre vencedores y vencidos para experimentar un cambio pacífico, maduro. Constituyó una alianza implícita entre el sandinismo y una fracción de la burguesía conservadora. Se produjo así una experiencia original de un ejecutivo encabezado por fuerzas claramente conservadoras y un ejército en manos de ex comandantes guerrilleros. Pudo convertirse en una fórmula feliz, pero la UNO, que era en efecto una coalición de oportunidad, se dividió en las mismas partes que la componían. La situación de Nicaragua alcanzó, de nuevo, una experiencia de ingobernabilidad.

5. OTRAS LECCIONES MÁS

Las elecciones, finalmente, han tenido resultados precisos en la dimensión ideológica y programática. En los cinco países se produjo un desplazamiento a la derecha de las opciones centristas. Las últimas elecciones presidenciales fueron victorias para los partidos de derecha, aunque esta denominación carezca del sentido que hasta hace poco podría dársele. Esto por dos razones. Una, porque sólo en Nicaragua existe una izquierda electoral y partidaria significativa. En el resto de la región no hay partidos que puedan parecerse a una opción política avanzada, programática, capaces de contender con alguna posibilidad de respaldo popular. Otra, porque la oleada conservadora en política y neoliberal en economía lo cubre todo y obliga a redefinir posiciones en un espectro que cambió también como resultado del fin del socialismo estatal.

El triunfo de las opciones conservadoras se produjo, además, de la mano de partidos políticos nuevos, salvo en Honduras. Se habla de partidos nuevos porque se constituyen en el transcurso de la década bajo análisis, como la UNC y el MAS, de Guatemala, ARENA en el Salvador, la UNO y los partidos que la forman en Nicaragua y el PUSC en Costa Rica. De hecho, constituyen reagrupamientos de fuerzas políticas dispersas ideológicamente y que en los países donde hubo guerra, representan una opción de paz a cualquier precio. Se organizaron a causa de la presencia de una izquierda armada. ¿Cómo puede volver esa izquierda al campo abandonado de los combates electorales? Regresar a la política implica de manera radical abandonar una concepción militarista de la organización popular, de la participación de masas, de las relaciones con el contrincante. Esa concepción nueva de la organización implica asignarle a los mecanismos democráticos (participación libre, igualdad de oportunidades, incertidumbre en los resultados) un valor constitutivo, un lugar apropiado frente a las concepciones vanguardistas, jerarquizadoras, voluntaristas. En este contexto, el voluntarismo es antidemocrático. Hay que *desbloquear el campo de las luchas sociales*, y ello compromete tanto a la guerrilla como al ejército. Esto tiene que ver con el tema de la capacidad de sociedades como la guatemalteca o la salvadoreña para incorporar a la vida cívica a quienes fueron marginales por estar en la guerra.

Queda para otro momento el análisis de las elecciones como resultado contingente de la política y de los mecanismos modernizadores recientemente utilizados. También se ha dejado de lado la referencia a las instituciones, a su normalidad funcional y a las técnicas que las han acompañado, como sondeos y encuestas, recursos publicitarios, mensajes, imágenes, figuras, todo lo cual aproxima la experiencia centroamericana a lo que ocurre en latitudes más democráticas.

Los procesos electorales en Centroamérica, después de una década como la que ha terminado, permiten hacer algunas generalizaciones de las que excluimos a Costa Rica:

Las elecciones no democratizan la vida política en tanto no expresan cambios sociales favorables en la sociedad. Así como un mapa no es un territorio, recuerda

Rouquié, una elección no traduce la verdad de un sistema político.¹³ No obstante, son síntomas importantes, nuevos, en el sistema político y pueden constituir en algún momento el inicio de la consolidación de instituciones políticas con respaldo consensual. Las elecciones constituyen pruebas del estado de la opinión pública, a pesar de la manipulación telegenética. Finalmente, las elecciones buscan restablecer, pero sólo lo logran parcialmente, los sistemas de representación y mediación políticas.

Como también fue una década de guerras civiles, violencia política, militarización, violaciones atroces a los derechos humanos, generalización de la pobreza, etcétera, es necesario analizar el acto electoral en el escenario que define Thanatos.

Una primera cuestión a ser tomada en cuenta es que los procesos democratizadores, si efectivamente pueden conducir a la democracia política en Guatemala, El Salvador, en Honduras, no ocurren por el agotamiento o la transformación de las estructuras autoritarias, que devuelven a la sociedad política sus virtudes partidas. Aquí no hay restauración ninguna. Nuestra permanente interrogación es: ¿cuál es la *democracia posible* a construir si nos acompañan los cuatro jinetes del Apocalipsis?

En las condiciones vividas en la región, en que concurren elecciones y guerra, ésta aparece claramente como *el fracaso de la política*. Es ciertamente la política por otros medios, pero éstos no son políticos. Lo que define la política es que se realiza utilizando medios políticos, y termina siempre como el ejercicio pacífico de una estrategia de poder. En otras palabras, que las luchas por el poder se realicen con instrumental político define la política. Hacer política es buscar coincidencias, consensos. Hay una cultura del convencimiento, de la tolerancia disputada, de la acción que reúne las diferencias para convertirlas en unanimidades. Las luchas políticas son formas de sociabilidad en que se trata de influir sobre la vida pública. La democracia política, por ello, supone una cultura racional, un componente de modernidad, que tiene como referente el poder para ejercitar desde ahí la voluntad de autotransformación social.

Que ella se haga por medios militares, define la guerra. La de la guerra es la fatal diada de la vida o de la muerte como sinónimos de victoria o derrota, respectivamente. No se olvide, además, que la opción del guerrero es estrecha y además, jerárquica, autoritaria y obediente. Las acciones contrainsurgentes tuvieron un ánimo de cruzada religiosa, que parece inspirarse en el olvido de la política y fincarse en el *odio puro*. Esta caracterización alcanza para definir a un enemigo indefinido al que se le adjudican propósitos de agresión a los fundamentos morales y espirituales de la nación. A partir de allí, la lucha es permanente, es decir, una "estrategia sin tiempo"¹⁴ que se va convirtiendo en guerra total.

Las estrategias de la democracia son la competencia libre, abierta, voluntaria, moral, de responsabilidades ciertamente, pero la derrota no conlleva ni la igno-

¹³ G. Hermet, A. Rouquié y J. Linz, *¿Para qué sirven las elecciones?*. FCE, México, 1982, p. 152.

¹⁴ Véase el excelente trabajo de Carina Perelli, "La percepción de la amenaza y el pensamiento político de los militares en América del Sur", en L. Goodman, J. Mendelson y J. Rial (eds.), *Los militares y la democracia: el futuro de las relaciones cívico-militares en América Latina*, Peitho, Montevideo, 1991.

minia ni la muerte. El perdedor conserva su derecho a reiterar su opción. La construcción de la democracia no puede salir de la guerra, sobre todo si son las mismas fuerzas las que la practican, coetáneamente. La interrogación puede ser aún más precisa: ¿Puede la democracia construirse después de una derrota popular? Nos enfrentamos aquí con dos lógicas no sólo distintas, sino contradictorias, como ha sido dicho líneas arriba.

Recordemos entonces que las primeras elecciones en El Salvador (Asamblea Constituyente, marzo de 1982) se realizaron cuando la primera ofensiva general del FMLN había fracasado y el ejército retomaba la iniciativa represiva en todo el país. Dos años después, las primeras elecciones en Nicaragua (1984: constituyente y presidencial) corresponden al momento de la mayor ofensiva de las fuerzas irregulares que Estados Unidos creó como parte de su estrategia antisandinista: un tercio del territorio nacional estaba en las llamadas zonas de combate. Ese mismo año, se realizaron las primeras elecciones en Guatemala (mayo de 1984: Asamblea Constituyente) que coincidieron con el fin del operativo "Victoria 82", en el que el ejército guatemalteco no aniquiló la guerrilla, pero la hizo retroceder a sus antiguas áreas, mientras destruía físicamente 440 aldeas indígenas, asesinaba a 75 mil campesinos y se producía el mayor desplazamiento de población de su historia (calculado en 500 000 personas).¹⁵

La política, recordando a Maquiavelo, es el triunfo de la racionalidad sobre los instintos, y la guerra es el desenfreno de los mismos, la emoción vengativa, el paroxismo del odio. Maquiavelo no descartó el traslado de la violencia de la sociedad a la política para conquistar espacios de poder. Pero sabía que la violencia produce hondas conmociones sociales, a las que consideró inevitables a condición de usarlas poco, una sola vez. Situado en esta perspectiva de la violencia (la guerra), no la disimuló, pero trató de disminuirla, en lo que Sheldon Wolin ha llamado la economía de la violencia. *La política debe ser la economía de la violencia* para que pueda tener fundamento la lucha democrática, so pena de destruir la delicada red de relaciones sociales que la forman.

Estas relaciones están amenazadas hoy día en la peculiar coyuntura que vivimos porque desde el Estado y el mercado se atenta contra la calidad ciudadana. ¿Qué efectos producen en el ejercicio de la ciudadanía *la pobreza y el miedo*? Asumiendo que la seguridad y la riqueza están normalmente asociados, también podría uno preguntarse cómo actúa la élite del poder. Es sabido que la condición ciudadana es un reconocimiento legal, estatal. El Estado establece la legitimidad del ciudadano, del que a su vez depende la legitimidad de aquél como poder público. La vida democrática requiere, verdad sabida, de una ciudadanía viva que no sólo exista en la proclama constitucional. Es necesario que descienda del abstracto reconocimiento legal hasta la calle (la sociedad civil), donde se producen

¹⁵ De la numerosa bibliografía, citamos, K. Krueger y K. Enge, *Security and Development Conditions in the Guatemalan Highlands*, WOLA, Washington, 1985; CINAS, *La migración centroamericana y la situación de los salvadoreños desplazados*, México, 1986, cuaderno núm. 7; Sergio Aguayo, *El éxodo centroamericano*, SEP Cultura, 1985.

la organización y los conflictos sociales. Para ello son necesarias una base material y ciertas oportunidades que sólo la cultura produce.

Después de dos décadas de violencia política, el miedo constituye un componente de la conducta social, que termina siendo por ello una conducta prevista. Los diversos grados de terror público se originan en la carencia de seguridad, en la imprevisibilidad del acto punitivo y en su total impunidad. Todo esto tiene que influir en la conducta política y en el acto electoral. En estas condiciones, la ciudadanía política "se disuelve". ¿Cómo votan los millones de campesinos empobrecidos y atemorizados? Votan pero no eligen, como lo hemos dicho en otra oportunidad. Son sólo ciudadanos a medias de una democracia política de baja intensidad. Éstas son las condiciones en que se desarrollan las elecciones en Centroamérica, salvo Costa Rica. Su condición democrática la excluye de este análisis de anormalidades.

Cuadro 1

HONDURAS: ELECCIONES PARA CONSTITUYENTE Y PRESIDENCIALES POR CATEGORÍAS 1980-1989

	Asamblea Constituyente 1980		Presidenciales 1981		Presidenciales 1985		Presidenciales 1989	
		%		%		%		%
Pobl. en edad de votar*	1 680 393	100.0	1 749 520	100.0	2 024 585	100.0	2 360 969	100.0
Población inscrita	1 233 756	73.4	1 558 316	89.0	1 900 000	93.8	2 263 348	96.0
Votos emitidos	1 003 680	100.0	214 735	100.0	1 597 80	100.0	1 799 146	100.0
Votos válidos	959 412	95.5	1 180 060	97.5	1 541 798	96.5	1 753 556	97.4
Blancos y nulos	42 268	4.2	34 675	2.8	56 003	3.5	45 590	2.5
Abstención**		18.6		22.1		15.1		20.6
Participación***		72.3		69.4		78.9		77.9

* Estimaciones nuestras con base en proyecciones.

** Inscritos que no votaron.

*** % de votos emitidos en relación a la población en edad de votar.

FUENTE:

Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica, CELADE, Honduras, *Proyecciones de Población*, núm.1, abril, 1981.

Posas, Mario, *La Democratización en Honduras*, IIDH-CAPEL, "Informe de la Misión de Observación", Elecciones Generales, Honduras, 26 de noviembre de 1989.

FLACSO, *Centroamérica en Cifras*, 1991.

Cuadro 2

HONDURAS: NÚMEROS ABSOLUTOS Y PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS POR LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES 1981-1989

PARTIDOS	Asamblea Constituyente 1980		Presidenciales 1981		Presidenciales 1985		Presidenciales 1989	
		% válidos		% válidos		% válidos		% válidos
PARTIDO LIBERAL (Azcona Hoyos)	459 789	48.0	636 392	54.0	786 594 (424 358)	51.0 (27.5)	776 983	44.3
PARTIDO NACIONAL (Callejas)	423 623	44.1	491 089	41.6	701 406 (656 882)	45.5 (42.6)	917 168	52.3
PINU	33 052	3.4	24 419	2.1	23 705	1.5	33 952	1.9
MDNI	4 890	0.5						
PDCH			19 163	1.6	30 173	2.0	25 453	1.4

FUENTE: *Idem* cuadro 1.

Cuadro 3
EL SALVADOR: PARTICIPACIÓN ELECTORAL 1982-1991

	Elec. Asamblea Constituyente 1982		Presidenciales 1ra. vuelta 1984		Presidenciales 2da. vuelta 1984		Diputados 1985		Diputados 1988		Presidenciales 1989		Diputados 1991	
		%		%		%		%		%		%		%
Pobl. en edad de votar*	2 170 064	100.0	2 197 033	100.0	2 197 033	100.0	2 227 785	100.0	2 428 071	100.0	2 468 806	100.0	2 608 829	100.0
Población inscrita**	1 981 254	91.2	1 800 000	81.9	1 800 000	81.9	1 800 000	79.0	1 650 000	67.9	1 834 000	74.2	2 180 000	83.5
Votos emitidos	1 551 687	100.0	1 428 694	100.0	1 526 722	100.0	1 107 472	100.0	1 150 934	100.0	1 003 153	100.0	1 133 013	100.0
Votos válidos	1 362 339	87.8	1 266 276	88.6	1 404 366	92.0	965 231	87.2	930 749	80.8	939 078	93.6	1 051 481	92.8
Blancos y nulos	189 348	13.9	162 418	11.4	122 356	8.0	136 365	13.8	220 185	19.2	64 075	6.4	101 532	8.9
Abstención de inscritos que no votaron		24.8		20.7		15.2		38.5		30.3		45.3		48.1
Particip. de electores en relación a la población en edad de votar		71.5		65.0		65.0		49.7		47.4		40.6		44.1

* Estimaciones hechas por nosotros con base en proyecciones.

** El Consejo Central de Elecciones no especificó la cantidad de inscritos, sino sólo cédulas entregadas cuyas cantidades tienen variaciones muy grandes entre elecciones, por lo tanto los datos presentados son poco confiables.

FUENTE:

ECA, El Salvador: UCA núms. 438 y 485, abril de 1985 y mayo de 1989.

Córdova, R., "El Salvador: análisis de las elecciones presidenciales y perspectivas políticas, marzo de 1989", en *Polémica*, C.R., núm. 11, mayo-agosto, 1990.

IIDH-CAPEL Boletín Electoral Latinoamericano núm. 1, 1989.

Bolos, Silvia, *Elecciones en El Salvador*, 1984, CECARI, núm.3.

MIPLAN, Dirección General de Planeamiento, DIGESTYC. Dirección de Población, "El Salvador, Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950-2025".

CELADE FNUAP, noviembre de 1986.

Informe del Consejo Central Elecciones, 26 de marzo de 1991, Costa Rica, CSUCAPAX, 1991.

Instituto de Relaciones Europeo Latinoamericano.

"Elecciones y Negociaciones en El Salvador, obstáculos y expectativas", dossier núm. 29, enero 1991.

Cuadro 4

EL SALVADOR: PARTICIPACIÓN ELECTORAL 1982-1991

Partidos	Elecciones			Presid.			Presid.			Diputado			Diputado			Presid.			Diputado			
	Asamblea Constituyente 1982	% emitid. válidos	% válidos	1ra. vuelta	% emitid. válidos	% válidos	2a. vuelta	% emitid. válidos	% válidos	1985	% emitid. válidos	% válidos	1988	% emitid. válidos	% válidos	1989	% emitid. válidos	% válidos	1991	% emitid. válidos	% válidos	
PDC	546 218	35.2	40.1	549 727	38.4	43.4	752 625	49.3	53.6	505 338	45.6	52.3	326 716	28.3	35.1	338 369	33.7	36.0	294 029	26.0	28.0	
ARENA	402 304	25.9	29.5	376 917	26.4	29.8	651 741	42.7	46.4	286 665	25.9	29.7	447 696	38.9	48.1	505 370	50.3	53.8	466 091	41.1	44.3	
PCN	261 153	16.8	19.1	244 556	17.1	19.3				80 730	7.3	8.4	78 756	6.8	8.5	38 218	3.8	4.1	94 531	8.3	9.0	
ALIANZA DEMOCRÁTICA	100 586	6.5	7.4	43 929	3.1	3.4				35 565	3.2	3.7										
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA																35 642	3.5	3.8	127 855	11.2	12.1	
PARTIDO LIBERACIÓN													34 960	3.0	3.7							

Porcentajes en relación a votos emitidos y válidos.

FUENTE: *Idem.* cuadro 3.

Cuadro 5

GUATEMALA: ELECCIONES PRESIDENCIALES Y CONSTITUYENTES POR CATEGORÍAS 1982-1991

	Presidenciales 1982*		Asamblea Constituyente 1984		Presidenciales 1a. vuelta 1985		Presidenciales 2a. vuelta 1985		Presidenciales 1a. vuelta 1990		Presidenciales 2a. vuelta 1991	
		%		%		%		%		%		%
Pobl. en edad de votar**	3 483 150	100.0	3 708 595	100.0	3 783 743	100.0	3 783 743	100.0	4 404 286	100.0	4 404 286	100.0
Población inscrita	2 355 064	67.6	2 554 002	68.9	2 753 575	72.7	2 753 575	72.7	3 205 000	72.8	3 205 000	72.8
Votos emitidos	1 079 381	100.0	1 994 933	100.0	1 907 771	100.0	1 806 324	100.0	1 808 801	100.0	1 449 500	100.0
Votos válidos	975 384	90.4	1 535 554	76.9	1 679 000	88.0	1 657 823	91.7	1 554 313	85.9	1 375 379	94.9
Blancos y nulos	103 997	9.6	459 379	23.0	228 771	11.9	142 501	7.8	254 488	14.1	74 110	5.1
Abstención***		54.2		21.9		30.8		34.5		43.6		54.8
Participación****		30.9		53.7		50.4		47.7		41.1		32.9

* Fueron declaradas nulas por fraudulentas tras el golpe de Estado de marzo de 1982.

** Estimaciones nuestras sobre la base de proyecciones.

*** Inscritos que no votaron.

**** % de votos emitidos en relación a la población en edad de votar.

FUENTE:

Infopress núm. 484, 11 de marzo de 1982.

IIDH-CAPEL, Rosada G. H. Guatemala 1984, Elecciones para Asamblea Nacional Constituyente. Cuadernos CAPEL núm. 2.

IIDH-CAPEL, Boletín Electoral Centroamericano núm. 4, julio-dic., 1990.

IIDH-CAPEL, Informe de la Misión de Observación Guatemala, 11 de noviembre de 1990 y 6 de enero de 1991.

Cuadro 6

GUATEMALA: NÚMEROS ABSOLUTOS Y PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS
POR LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES 1982-1991

PARTIDO	Presidenciales 1982*		Asamblea Constituyente 1984		Presidenciales 1a. vuelta 1985		Presidenciales 2a. vuelta 1985		Presidenciales 1a. vuelta 1990		Presidenciales 2a. vuelta 1991	
	votos	% válidos	votos	% válidos	votos	% válidos	votos	% válidos	votos	% válidos	votos	% válidos
DCG			326 064	21.2	648 803	38.6	1 133 517	68.3	271 842	17.4		
UCN			273 744	17.8	339 695	20.2	524 306	31.7	399 679	22.7	438 990	31.9
MLN-CAN					210 966	12.5						
PDCN-PR			249 712	16.2								
PR					231 423	13.7						
PAN			146 092	9.5					268 776	17.3		
MAS									375 119	24.1	936 389	68.1
FRENTE DEMOCR. POPULAR**	379 051	38.9										
MLN	275 487	28.2										
UNION PATRIÓTICA***	221 810	22.7										
CAN	99 047	10.1										

* Fueron declaradas nulas por fraudulentas tras el golpe de Estado de marzo de 1982.

** Formado por la alianza PID, PR, FUN.

*** Formado por la alianza DC, PNR.

FUENTE: *Idem.* cuadro 5.

Cuadro 7

COSTA RICA: ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGÚN CATEGORÍAS 1982-1990

	Presidenciales 1982	%	Presidenciales 1986	%	Presidenciales 1990	%
Pobl. en edad de votar [*]	1 335 615	100.0	1 547 627	100.0	1 752 225	100.0
Población inscrita	1 261 127	94.4	1 486 474	96.0	1 692 050	96.5
Votos emitidos	991 679	100.0	1 216 300	100.0	1 384 326	100.0
Votos válidos	966 576	97.5	1 185 222	97.4	1 349 014	97.4
Blancos y nulos	25 106	2.5	31 078	2.6	35 312	2.6
Abstención ^{**}		21.4		18.2		18.2
Participación ^{***}		74.2		78.5		79.0

* Estimaciones nuestras con base en proyecciones.

** Inscritos que no votaron.

*** % de votos emitidos en relación con la población en edad de votar.

FUENTE:

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, CELADE, DGEC.

Estimaciones y proyección de población 1950-2025, 1988.

Rovira, J., "Costa Rica, partidos políticos y régimen democrático" en *Polémica*, FLACSO, núm. 11, mayo-agosto, 1990.

IDH-CAPEL, Boletín Electoral Latinoamericano, núm. III, enero-junio de 1990.

Rojas, M., "Las elecciones de 1986 y el futuro de la Democracia en Costa Rica" en *Polémica*, ICADIS, núm. 19, 1a. época, enero-abril, 1986, FLACSO, *Centroamérica en Cifras*, 1991.

Cuadro 8

COSTA RICA: NÚMEROS ABSOLUTOS Y PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS POR LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES 1982-1990

PARTIDOS	Presidenciales 1982	% válidos	Presidenciales 1986	% válidos	Presidenciales 1990	% válidos
P. Liberación Nacional	568 374	58.8	620 314	52.3	636 701	47.1
P. Unidad Soc. Cristiana	325 187	33.6	542 434	46.1	694 705	51.5
Alianza Popular			9 099	0.8		
Pueblo Unido	32 186	3.3	6 599	0.5	9 101	0.7
Alianza Nac. Cristiana					4 709	0.3
Movimiento Nacional	37 127	3.8				

FUENTE: *Idem.* cuadro 7.

Cuadro 9

NICARAGUA: ELECCIONES PRESIDENCIALES Y CONSTITUYENTE POR CATEGORÍAS 1984-1990

	Presidenciales y constituyente 1984		Presidenciales	
		%	1990	%
Pobl. en edad de votar *	1 610 592	100.0	2 007 130	100.0
Población inscrita	1 551 997	96.3	1 752 088	87.3
Votos emitidos	1 170 142	100.0	1 510 888	100.0
Votos válidos	1 098 933	93.9	1 420 589	94.1
Blancos y nulos	71 209	6.1	90 249	5.9
Abstención **		24.6		13.8
Participación ***		73.1		76.5

* Estimaciones nuestras con base en proyecciones.

** Inscritos que no votaron.

*** % de votos emitidos en relación a la población en edad de votar.

FUENTE:

Envíos núms. 101 y 102, Managua, Nicaragua, febrero y marzo de 1990.

IDH-CAPEL- Boletín Electoral Latinoamericano núm. III, enero-junio de 1990.

Electoral Democracy Under International Pressure, Report of Latin American Studies Association, 15 de marzo de 1990.

INEC-CELADE- *Nicaragua Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2025*, 1983.

Cuadro 10

NICARAGUA: NÚMEROS ABSOLUTOS Y PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS POR LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES 1984-1990

PARTIDOS	Presidenciales Constituyente		Presidenciales	
	1984	% válidos	1990	% válidos
FSLN	735 967	67.0	579 886	40.8
P. CONSERVADOR DEMÓCRATA	154 327	14.0		
P. LIBERAL INDEPENDIENTE	105 560	9.6		
P. POP. SOCIAL CRISTIANO	61 199	5.6		
UNIÓN NACIONAL OPOSITORA			777 552	54.7
MOV. UNID. REVOLUCIONARIO			16 751	1.2
P. SOCIAL CRISTIANO			11 136	0.8

FUENTE: *Idem.* cuadro 9